



MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GUITRON
SECRETARIA: Lic. María del Carmen Sánchez Hidalgo

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal -
Pleno correspondiente al día veintinueve de octubre de -
mil novecientos ochenta y cinco.

VISTOS; Y

Mtro. Ponente
Mariano Azuela Guitrón

R E S U L T A N D O:

Vo. Bo.

Co. Jado

EL J. AMIN
E. C. S. S. S.

PRIMERO.- Por escrito presentado el diecinueve -
de enero de mil novecientos ochenta y cuatro ante la Ofi-
cialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Mate-
ria Administrativa en el Distrito Federal José L. Rion San-
tiesteban, en representación de la Empresa Invermexico, so-
ciedad anónima, solicitó el amparo y la protección de la -
Justicia Federal contra las autoridades y por los actos -
que a continuación se indican:

"a) Del H. Congreso de la Unión, la aprobación -
"y expedición del Decreto que deroga la Ley de Hacienda -
"del Departamento del Distrito Federal del 31 de diciembre
"de 1941, publicado en las páginas 45 a 70, primera sec- -
"ción del Diario Oficial de la Federación No. 44 del 31 de
"diciembre de 1982; mismo que aprueba una nueva Ley de Ha-
"cienda del Departamento del Distrito Federal, que entró -
"en vigor el 1o. de enero de 1983. Así como el Decreto que
"reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la -
"Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, pu-
"blicado el día 29 de diciembre de 1983 en el Diario Ofi-
"cial de la Federación. Concretamente, se reclama la incons-
"titucionalidad de los artículos 14, 18, fracciones II, III,

"e in fine, 18 A, 19, 21 y 22 fracciones I, II, III y IV,-
"de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Fede-
"ral y los artículos 2o. del Decreto que reforma, adiciona
"y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del
"Departamento del Distrito Federal y 7o., 8o. y 9o. transi-
"torios del mismo, pues, como se demostrará más adelante,-
"la ley, el decreto que la reforma, adiciona y deroga, así
"como los numerales citados son inconstitucionales porque-
"dejan a discreción de la autoridad encargada de aplicar--
"los, la determinación de la base del valor catastral, - -
"siendo ésta uno de los elementos esenciales de todo tribu-
"to y sus elementos deben de constar íntegramente en la -
"ley. Por tanto, los preceptos mencionados de la Ley de Ha-
"cienda del Departamento del Distrito Federal y ~~del~~ Decre-
"to que la reforma, adiciona y deroga al conceder una dis-
"crecionalidad a la autoridad para la determinación de la-
"base del impuesto predial son violatorios del principio -
"de legalidad contenido en el artículo 31, fracción IV y -
"de las garantías de igualdad, legalidad y seguridad jurí-
"dica tuteladas por los artículos 13, 14 y 16 constitucio-
"nales; los cuales causan un perjuicio a mi representada.-
"Por otra parte, también resulta inconstitucional el artí-
"culo 21 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distri-
"to Federal en virtud de que establece la obligación a car-
"go de mi representada de autodeterminar el valor catas- -
"tral de los inmuebles de su propiedad sin que esta conoz-
"ca el valor del suelo, el cual es uno de los elementos -
"para determinar el valor catastral, conforme a lo dispues



"to por la fracción I del artículo 18 de la precitada ley.
"Situación que se agrava al dejarse en manos de la autori-
"dad (artículo 22, fracción III) la facultad de determinar
"unilateralmente el valor mínimo del suelo. Facultad que,-
"sin duda, será eventualmente ejercitada por la autoridad-
"para rectificar o ratificar el valor catastral autodeter-
"minado y así incrementar la carga fiscal a mi representa-
"da. Asimismo, se reclama que conforme a lo dispuesto en -
"el artículo 9o. transitorio, 4o. párrafo, de dicha ley, -
"no se considerarán como definitivos los pagos de impuesto-
"predial que efectúe mi representada durante el presente -
"año hasta que se determine el impuesto a pagar en base a
"lo dispuesto por la nueva Ley de Hacienda del Departamen-
"to del Distrito Federal. b) Del S. presidente de la Repú-
"blica se reclama la expedición, promulgación y publica- -
"ción de la ley y del decreto que reforma, adiciona y dero-
"ga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Depar-
"tamento del Distrito Federal. c) Del C. secretario de Go-
"bernación la orden de publicación y refrendo de la citada
"ley y del decreto. d) Del C. secretario de Hacienda y Cré-
"dito Público el refrendo de la ley y del decreto. e) Del-
"jefe del Departamento del Distrito Federal, la firma de -
"ley y del decreto. f) También se reclama de los CC. jefe-
"del Departamento del Distrito Federal y de los directores
"de Contribuciones Propiedad de Raíz y Liquidación y Giro,
"dependientes estos dos de la Tesorería del Distrito Fede-
"ral, actos concretos de aplicación de la ley y, artículos
"14 y 18, fracciones I y III, 21 y 22, fracciones I, II, -



DE LA MANA
DE ACUERDO

"III, IV y 9o. transitorio, párrafo 4o. de la Ley de Ha-
 "cienda del Departamento del Distrito Federal, consisten--
 "tes específicamente en la determinación del valor catas-
 "tral por parte de las autoridades fiscales encargadas de-
 "aplicar dicha ley; así como el requerimiento del pago de-
 "impuesto predial modificado con motivo de la determina- -
 "ción del nuevo valor catastral; y la obligación de autode-
 "terminar el valor catastral de los inmuebles propiedad de
 "mi representada sin que ésta conozca el valor del suelo,-
 "actos éstos que pretendan realizar dichas autoridades res-
 "ponsables o cualesquiera de sus dependencias, o por las -
 "acciones que las mismas autoricen durante la tramitación-
 "de esta demanda de garantía, hasta su conclusión. Igual--
 "mente, se reclama de dichas personas la aplicación de lo-
 "dispuesto por el artículo 9o. transitorio del decreto que
 "reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la -
 "Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal."

SEGUNDO.- La parte quejosa narró los siguientes-
 antecedentes de los actos reclamados:

"I. Mi representada es propietaria de los depar-
 "tamentos en condominio Nos. [REDACTED]

[REDACTED] todos ubicados en el edi-
 "ficio No. [REDACTED] de [REDACTED] Colonia [REDACTED]

[REDACTED] tal y como lo acre-
 "dito con el original del contrato de promesa de compraven-
 "ta celebrado entre mi representada y Promotora Nilo, S. -
 "A., el doce de febrero de 1979. Dichos predios están cla-
 "sificados para efectos del impuesto predial con los núme-



A. R. 8712/84.

- 5 -

"ros de cuenta: [REDACTED]

[REDACTED] respectivamente. II. Mi re--
"presentada tiene que cumplir con las obligaciones deriva
"das de la propiedad de los inmuebles antes precisados, -
"entre las que se encuentra pagar el impuesto predial es-
"tablecido en el capítulo II del título I de la Ley de Ha
"cienda del Departamento del Distrito Federal, cuya base,
"de conformidad con el artículo 14, segundo párrafo, de --
"esta ley es el valor catastral. III. El 1o. de enero de -
"1983, entró en vigor la Ley de Hacienda del Departamento-
"del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de -
"la Federación el 31 de diciembre de 1982, que derogó la -
"anterior del 31 de diciembre de 1941. Conforme al artícu-
"lo 21 de la ley, las sociedades mercantiles, excepto las-
"cooperativas, están obligadas a informar (se entiende que
"a la autoridad competente, sin que lo aclare el artículo-
"citado), mediante declaración, el valor catastral de sus-
"predios, calculado conforme a la ley. El cálculo del va--
"lor de los inmuebles debe realizarse conforme al procedi-
"miento establecido en el artículo 18 de la ley; valor que,
"conforme al artículo 18 A, puede ser modificado por el con
"tribuyente, y en última instancia, también por la autori-
"dad (artículo 22 y 9o. transitorio). Es decir, el valor,-
"base del impuesto predial, es incierto, no determinado ni
"determinable en la ley. IV. El valor catastral de los in-
"muebles de mi representada fue declarado el 24 de mayo de

A DE LA MANO
DE ACUERDO

"1983, Ad-Cautelam, por no considerar constitucional la--
"aplicación de la ley, como lo acredito con una copia se--
"llada por la Dirección de Catastro y Contribuciones a la--
"Propiedad Raíz de la Tesorería del Distrito Federal. V. --
"El artículo 9o. transitorio de la ley, en su cuarto párra
"fo, establece que se considerarían pagos provisionales --
"los pagos de impuesto predial efectuados durante 1983, --
"hasta que se determine el impuesto a pagar con base en lo
"dispuesto en la misma. Es decir, el impuesto a cargo de --
"mi representada sería determinado unilateralmente por la--
"autoridad competente. VI. Para los efectos de lo dispues--
"to por el artículo 21 de la Ley de Amparo, mi representa--
"da manifiesta que el primer acto de aplicación del acto --
"reclamado tuvo lugar el día 29 de diciembre de 1983, la--
"cha en la que pagó el impuesto predial conforme ~~era~~ ^{era} ~~la~~ ^{la} ~~base~~ ^{base} ~~del~~ ^{del} ~~valor~~ ^{valor} ~~catastral~~ ^{catastral} ~~y~~ ^y ~~que~~ ^{que} ~~aparece~~ ^{aparece} ~~en~~ ^{en} ~~las~~ ^{las} ~~boletas~~ ^{boletas} ~~correspondientes~~ ^{correspondientes} ~~al~~ ^{al} ~~sexto~~ ^{sexto} ~~bimestre~~ ^{bimestre} ~~de~~ ^{de} ~~1983.~~ ^{1983.} Como mi re --
"presentada considera que la Ley de Hacienda del Departam--
"ento del Distrito Federal vigente y los artículos enume--
"rados anteriormente del decreto que reforma, adiciona y --
"Deroga Diversas Disposiciones de la Ley de Hacienda del --
"Departamento del Distrito Federal, publicado el 29 de di--
"ciembre de 1983 en el Diario Oficial de la Federación vio
"lan las garantías de igualdad, seguridad jurídica y lega--
"lidad tuteladas por los artículos 1o., 14, 16 y 31, frac--
"ción IV, de la Constitución Política de los Estados Uni--
"dos Mexicanos, como jurisprudencialmente lo ha reiterado--
"la Suprema Corte de Justicia, se ve constreñida a deman--



"dar a las autoridades mencionadas a continuación por la -
"creación, aprobación, promulgación y aplicación de la Ley-
"de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, en espe-
"cial los artículos 14, 18, 18A, 21, 22 y 90. transitorio,-
"así como del artículo segundo del decreto que reforma, adi-
"ciona y deroga diversas disposiciones de dicha ley y 60.,-
"70. y 80. transitorios del mismo, publicado el día 29 de -
"diciembre de 1983, cuyo objeto y alcances ~~los~~ ^{los} consi-
"dera inconstitucionales."

TERCERO.- La parte quejosa invoca como violados -
en su perjuicio los artículos 10., 13, 14, 16 y 31, frac- -
ción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos -
Mexicanos por los conceptos de violación siguientes:

SECRETARÍA DE LA UNIÓN
FEDERAL DE ALBERGUES

"Inicialmente cabe señalar que, como lo ha recono-
cido ese H. Poder Judicial Federal, para la validez consti-
"tucional de un impuesto es necesario que todos sus elemen-
"tos estén contenidos en una ley. Lo anterior se desprende-
"de la tesis jurisprudencial visible a fojas 481 bajo el -
"número 1, del Informe rendido al Pleno de la Suprema Corte
"de Justicia de la Nación, por su presidente al terminar el
"año de 1976, la cual a la letra dice: "IMPUESTOS, PRINCIPIO
"DE LEGALIDAD QUE DEBEN SALVAGUARDARLOS.- Al disponer el ar-
"tículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que -
"son obligaciones de los mexicanos "contribuir para los gas-
"tos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipi-
"pio en que residan, de la manera proporcional y equitativa
"que dispongan las leyes" no solo establece que para la va-
"lidez constitucional de un tributo es necesario que, prime-
"ro esté establecido por ley, segundo, sea proporcional y -

"equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gas- -
"tos públicos, sino que también exige que los elementos - -
"esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, -
"base, tasa y época de pago, estén consignados de manera ex
"presa en la ley, de las autoridades exactoras, ni para el-
"pago de impuestos imprevisibles o a título particular, si-
"no que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las -
"disposiciones generales de observancia obligatoria dicta--
"das con anterioridad al caso concreto de cada causante y -
"el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo -
"momento conocer la forma cierta de contribuir para los gas
"tos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en -
"que resida. Es decir, el principio de legalidad significa-
"que la ley que establece el tributo debe definir tales -
"son los elementos y supuestos de la obligación tributaria;
"esto es, los hechos imponibles, los sujetos pasivos de la-
"obligación que va a nacer, así como el objeto, la base y -
"la cantidad de la prestación; por lo que todos esos elemen
"tos no deben quedar al arbitrio o discreción de la autori-
"dad administrativa. En resumen, el principio de legalidad-
"en materia tributaria puede enunciarse mediante el aforis-
"mo, adoptado por analogía del derecho penal, "nullum tribu
"tum sine lege". Amparo en revisión 331/76. María de los An
"geles Prendes de Vera. 31 de agosto de 1976. Unanimidad de
"votos. Amparo en revisión 5332/75. Blanca Meyerberg de Gon
"zález. 31 de agosto de 1976. Unanimidad de 15 votos. Ampa-
"ro en revisión 5464/75. Ignacio Rodríguez Treviño. 31 de -
"agosto de 1976. Unanimidad de 15 votos. Amparo en revisión



5888/75. Inmobiliaria Havre, S. A. 31 de agosto de 1976.--

"Unanimidad de 15 votos. Amparo en revisión 1008/76. Anto--

"nio Hernández Abarca. 31 de agosto de 1976. Unanimidad de--

"15 votos." Por ello, en la especie se confirma la inconsti

"tucionalidad de la Ley de Hacienda del Departamento del -

"Distrito Federal y específicamente la de sus preceptos que

"contemplan al impuesto predial ~~previsto~~ previsto en los ar-

"tículos 14, 18, fracciones I y III, y último párrafo, 18A,

"21, 22, fracciones I, II, III y IV y el 9o. transitorio, pá-

"rrafo cuarto, pues se deja al arbitrio de la autoridad en-

"cargada de aplicar la ley, la facultad de determinar la ba

"se del impuesto predial, constituida por el valor catas-

"tral, situación que jurídicamente implica una facultad dis

"crecional en un campo que constitucionalmente se encuentra

"vedada. A mayor abundamiento, la inconstitucionalidad de -

"la creación y aplicación del impuesto predial resulta de -

"los siguientes conceptos de violación: I. En el caso de -

"una sociedad mercantil, como lo es mi representada, la que

"es propietaria de los inmuebles cuyas características se -

"han señalado, al ser contribuyente del impuesto predial no

"tiene seguridad jurídica en cuanto a la certeza y monto de

"la carga fiscal con la que debe cumplir, ya que la autori-

"dad puede incrementar ese valor catastral. En efecto, con-

"forme a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito -

"Federal, durante el período fiscal de 1983 los pagos de -

"las boletas que liquide a la Tesorería conforme al valor -

"determinado para 1982, sólo se considerarán provisionales,

"por mandato del párrafo cuarto del artículo 9o. transito--

MA DE LA NACION
DE ACUERDO

"rio de la ley; esto es, los pagos son "provisionales" a -
"cuenta de una cifra desconocida por concepto de impuesto -
"predial que determine la autoridad. Si bien la ley estable
"ce que el incremento no será exigible al contribuyente si-
"no después de transcurridos dos años a partir del 31 de di-
"ciembre de 1982 y durante dicho lapso no se causarán recar-
"gos ni impondrán sanciones, ello no es óbice para que la -
"base del impuesto predial quede imprecisa e incierta por lo
"menos durante dos años, lo cual, legalmente implica un es-
"tado de incertidumbre e inseguridad para el sujeto pasivo-
"del tributo. II. Mi representada impugna la inconstitucio-
"nalidad del artículo 18, fracción III y 22, fracción II, de
"la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, -
"pues al ser omisa respecto al modo en que la autoridad de-
"be practicar el nuevo avalúo y de la persona competente pa-
"ra efectuarlo, esto implica una violación al artículo 14 -
"constitucional en materia de garantía de audiencia. III. -
"Igualmente, el artículo 18A de la Ley de Hacienda del De-
"partamento del Distrito Federal, al no establecer las re-
"glas o criterios de procedimiento respecto a la práctica -
"del avalúo para determinar el valor real y de la participa-
"ción del contribuyente en su fijación, es inconstitucional
"ya que al aludir al "valor real" del inmueble no se precisa
"su alcance y contenido legal. En consecuencia, al ser el -
"valor real del inmueble un concepto ajeno para efectos del
"impuesto predial, y al desconocerse su contenido jurídico,
"se crea un estado de incertidumbre, pues al haber discre-
"pancia entre el valor catastral y el valor real del inmue-



ble, ésto trae como consecuencia que pueda presentarse una "discrepancia en la base cuyo análisis quedará al arbitrio- "de la autoridad. En efecto, si la determinación de la base "del impuesto predial no está definitivamente en determina- "da ley, sino que se deja indebidamente a la discreción de- "la autoridad encargada de aplicarla, ésto implica una vio- "lación a la fracción IV del artículo 31 constitucional; - "concretamente, a la garantía de legalidad impositiva, tal- "como lo ha reiterado la Suprema Corte de Justicia en tesis "jurisprudencial. IV. Por otra parte, para determinar la ba- "se del impuesto predial consistente en el valor catastral- "del inmueble, la autoridad podrá considerar el valor mínimo "del suelo, el cual subjetivamente deberá ser determinado - "por la misma autoridad fiscal encargada de aplicar la Ley- "de Hacienda, precisamente para los efectos del impuesto - "predial (artículo 22, fracción III). Al respecto, no se es- "tablecen las normas conforme a las cuales deberá de apegar- "se la autoridad para determinar por zonas al Distrito Fede- "ral y el valor mínimo del suelo; y siendo esto así, mi re- "presentada considera inconstitucional que ese valor mínimo "del suelo amén de ser determinado, unilateral, subjetiva y "caprichosamente, sea aplicado retroactivamente en su per- "juicio, al exigir el artículo 9o. transitorio, 4o. párrafo, "de la Ley en cuestión que la determinación del valor catas- "tral y del impuesto predial se hará referida al 1o. de ene- "ro de 1983, cuando a esta fecha no existía ese valor mínimo "del suelo, evidentemente, mi representada menos aun conocía "ese valor mínimo del suelo para autodeterminar el valor ca

LA MANA
CUEBIA

"catastral que le exige el artículo 21 de la Ley de Hacienda-
"del Departamento del Distrito Federal que formulará y comu-
"nicará a la autoridad. En consecuencia, en la especie se -
"crea otra situación de incertidumbre para el contribuyente,
"pues si bien éste hace su avalúo conforme a las reglas con-
"tenidas en el artículo 18 de la ley, como lo determina la-
"fracción I de este precepto, es indiscutible que la autori-
"dad podrá rectificar dicho valor del suelo por no ser a su
"juicio el correcto, argumentando para ello que es el valor
"mínimo determinado con apego al artículo 22, fracción III,
"de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Fede--
"ral, mismo que no limita el alcance de las facultades de -
"autoridad en su rectificación. Por tanto, la autoridad po-
"drá en cualquier momento determinar... el valor mínimo del
"suelo, el cual, conforme al artículo 18, fracción I, es -
"precisamente uno de los elementos para determinar el valor
"catastral, el cual es la base como se ha sostenido, del im-
"puesto predial. La fracción III del artículo 22, corrobora
"lo anterior al establecer que cuando ese valor mínimo del-
"suelo resulte superior al catastral, éste se modificará y-
"se procederá al cobro en los mismos términos de la frac- -
"ción anterior. Es decir, no hay seguridad jurídica en la -
"base del impuesto predial a cargo de mi representada. Di--
"cho criterio es respaldado por la tesis jurisprudencial vi-
"sible a fojas 482, bajo el número 2 del Informe rendido -
"al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión por -
"su presidente al terminar el año de 1976, la cual a la le-
"tra dice: "PREDIAL, EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE HACIENDA -



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

"DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO POR DE---
"CRETO DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1974, ES VIOLATORIO DEL PRINCI
"PIO DE LEGALIDAD QUE CONSAGRA EL ARTICULO 31, FRACCION IV,
"DE LA CONSTITUCION FEDERAL, EN CUANTO AL SISTEMA DE VALUA-
"CION DE PREDIOS QUE ESTABLECE PARA LOS EFECTOS DEL IMPUES-
"TO. Tomando en consideración que el artículo 36, fracción-
"I, de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Fe-
"deral dispone que la base del impuesto predial lo es el va
"lor catastral del predio y el artículo 66 de dicho ordena-
"miento legal, reformado por Decreto de 21 de noviembre de
"1974, publicada en el Diario Oficial del 13 de diciembre de
"ese mismo año, establece que en tratándose de predios ya -
"valuados que no hayan sufrido modificaciones, no se reque-
"rirá valuación de los peritos valuadores de la Tesorería,-
"sino que bastará aplicar los nuevos valores unitarios de -
"tierra y de construcción que la propia Tesorería apruebe -
"para regir en el ejercicio fiscal correspondiente, resulta
"evidente que este último numeral deja en manos de la refe-
"rida autoridad exactora la facultad de fijar el valor ca-
"tastral de los predios antes mencionados a su discreción y,
"en consecuencia, la determinación de la base gravable del-
"propio impuesto predial, elemento esencial de éste. Es de-
"cir, si la Tesorería del Distrito Federal tiene la facultad
"de fijar cada dos años los valores unitarios de tierra y -
"de construcción y éstos son los que deben aplicarse para -
"actualizar los valores catastrales de predios ya valuados,
"que no hayan sufrido modificaciones, es incuestionable que
"bastará con que fije a su arbitrio dichos valores pues no

"se señala base alguna para hacerlo para que también a --
"su arbitrio fije el valor catastral de los inmuebles que --
"se encuentran en esas condiciones y, con ello, la base gra
"vable del tributo en tanto que, como se acaba de precisar,
"el citado valor catastral constituye la base gravable del-
"impuesto. Además, por vía de consecuencia, el sistema del-
"artículo 66 combatido deja en manos de la propia autoridad
"exactora la fijación, en cada caso concreto, de la cuota o
"tarifa de dicho tributo, también elemento esencial de éste,
"porque como el artículo 41 de la propia Ley de Hacienda ci
"tada establece una tarifa de tasa progresiva, en relación-
"con el valor catastral que se asigna a cada predio, es in-
"concuso que si la autoridad exactora desea gravar en mayor
"cantidad a un predio en particular, bastará con que se seña
"le un valor catastral que corresponda al renglón de la ta-
"rifa respectiva que lo logre; por lo tanto, el artículo arti
"culo 66, reformado, de la mencionada Ley de Hacienda del -
"Departamento del Distrito Federal viola el principio de le
"galidad que consagra el artículo 31, fracción IV, de la Co-
"stitución Federal y, por ende, la garantía de legalidad
"que en favor del gobernado tutelan los artículos 14 y 16 -
"constitucionales. Amparo en revisión 331/76. María de los-
"Angeles Prendes de Vera. 31 de agosto de 1976. Unanimidad-
"de 15 votos. Amparo en revisión 5332/75. Blanca Meyenberg-
"de González. 31 de agosto de 1976. Unanimidad de 15 votos.
"Amparo en revisión 5464/75. Ignacio Rodríguez Treviño. 31-
"de agosto de 1976. Unanimidad de 15 votos. Amparo en revi-
"sión 5888/75. Inmobiliaria Havre, S. A. 31 de agosto de -



1976. Unanimidad de 15 votos. Amparo en revisión 1008/76.-
"Antonio Hernández Abarca. 31 de agosto de 1976. Unanimidad
"de 15 votos". Al respecto, suponiendo que dicho atributo -
"fuese constitucional, cabe agregar que la ley no delimita-
"el lapso de vigencia temporal del valor mínimo del suelo -
"que unilateralmente podrá determinar la autoridad. Por lo-
"que ésta podrá legalmente modificar en sucesivas ocasiones
"el valor del suelo y así modificar en forma unilateral el-
"valor catastral. Por ende, también resulta inconstitucio--
"nal el artículo 14 de la Ley de Hacienda del Departamento-
"del Distrito Federal, por cuanto la tarifa ahí prevista se
"aplicará sobre un valor catastral, que a su vez, es contra-
"rio al artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna. V. El-
"artículo 21 de la Ley de Hacienda del Departamento del Dis-
"trito Federal es violatorio de la garantía de igualdad tu-
"telada por el artículo 13 Constitucional, pues le da un -
"trato desigual a los contribuyentes del impuesto predial,-
"ya que solo algunos tienen obligación de determinar el va-
"lor catastral de sus inmuebles. En efecto, es inconstitu--
"cional el artículo 21 de la Ley de Hacienda del Departamen-
"to del Distrito Federal ya que libera a unos contribuyentes
"de la necesidad de determinar su valor catastral, lo cual-
"es inadmisible jurídicamente por contrariar la fracción IV,
"del artículo 31 y el artículo 13 constitucionales. VI. Es-
"también inconstitucional, por contravenir la fracción IV -
"del artículo 31 constitucional, lo dispuesto en el párrafo
"cuarto del artículo 90. transitorio de la Ley de Hacienda-
"vigente a partir de 1983, porque hace imprevisible la car-

COPIA DE LA ORIGINAL
A DE ACUERDO

"ga fiscal por concepto de impuesto predial, al dejar en li-
"bertad a la autoridad para que determine el nuevo valor ca-
"tastral del inmueble, y mientras ésto no ocurra, sean pro-
"visionales los pagos de ese impuesto que se realicen duran-
"te 1983, conforme a las boletas que seguirá enviando la Te-
"sorería del Distrito Federal, relativas al impuesto deter-
"minado en 1982. También es inconstitucional dicho párrafo-
"del artículo 9o. transitorio de la Ley de Hacienda del De-
"partamento del Distrito Federal vigente a partir de 1983,-
"porque no respeta la fracción IV del artículo 31 constitu-
"cional, en tanto que impide al contribuyente pagar (o sea-
"finiquitar una obligación) el impuesto predial que le exi-
"ge el artículo 14 de dicha ley. Es decir, para dar cabal-
"cumplimiento a este numeral, el contribuyente debe hacer -
"pago del impuesto predial; pero el artículo 9o. transi-
"torio se lo impide desposeyendo a mi representada de esta -
"forma, de su derecho a cumplir con sus obligaciones y, por
"consecuencia, viola el artículo 14 constitucional. Lo jurí-
"dicamente correcto sería que se tuvieran como definitivos-
"los pagos por concepto de impuesto predial hecho por mi re-
"presentada hasta que, en su caso, adquiriera vigencia el -
"nuevo valor catastral que determinará la autoridad, en el-
"supuesto no admitido de que tal determinación no fuese in-
"constitucional. En consecuencia, aunque la Ley de Ingresos
"del Departamento del Distrito Federal para 1983, facultaba
"la percepción de ingresos por concepto de impuesto predial,
"el artículo 9o. transitorio, cuarto párrafo, de la Ley de-
"Hacienda del Departamento del Distrito Federal, no se ape-



a la fracción IV del artículo 31 y al artículo 14 constitucionales al quitar el efecto de definitivo al pago de impuesto predial realizado durante 1983, siendo que lo único cierto e inobjetable jurídicamente es que mi representada solo tiene deber constitucional de pagar un impuesto predial cierto y determinado, mientras que el previsto en la nueva ley ahora combatida no reúne estos atributos. Ante esta demostración de inconstitucionalidad de la ley, el decreto y artículos precisados, resulta que también es inconstitucional el acto de aplicación del artículo 90. transitorio, párrafo cuarto de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal y 70. transitorio del decreto que la reforma, adiciona y deroga, consistente en la liquidación para el cobro del impuesto predial contenido en la boleta relativa al año de 1983, en que la Tesorería del Distrito Federal aplicó este precepto dándole carácter de provisional al pago efectuado por mi representada, como lo acredité anteriormente. Inconstitucionalidad que deviene, por vía accesoria, contraria a los artículos 14 y 16 constitucionales, por ser un acto fundado en la ley tildada de inconstitucional. Por todo lo antes expuesto, es procedente, y así lo solicito, que su Señoría conceda a mi representada el amparo y protección de la Justicia de la Unión."

IN DE LA NACIÓN
DE ACUERDO

CUARTO.- El juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal por auto del veintiuno de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, admitió la demanda, registrándola con el número P48/84 y, previos los trámites legales respectivos con fecha nueve de abril de -

mil novecientos ochenta y cuatro dictó sentencia, la que -
concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

"Primero.- Se sobresee en el presente juicio de -
"garantías, en los términos del primer considerando de este
"fallo. Segundo.- La Justicia de la Unión ampara y protege-
"a la quejosa Invermexico, S. A., en contra de los actos re-
"clamados y autoridades que se señalan en el segundo conside-
"rando y en los términos precisados en el último consideran-
"do de esta sentencia. Notifíquese y personalmente."

Las consideraciones en que se fundó el juzgador -
para fallar en el sentido en que lo hizo son las siguientes:

"Primero.- El jefe del Departamento del Distrito-
"Federal, niega los actos de aplicación de los preceptos re-
"clamados. Los CC. director, subdirector de Rezagos y Ejecu-
"ción y subtesorero de Ingresos, todos dependientes de la -
"Tesorería del Distrito Federal, niegan los actos reclama--
"dos que se les atribuyen. En consecuencia, al no existir -
"prueba alguna que desvirtúe la negativa a mención, se debe
"sobreseer en el presente juicio de garantías, en relación-
"con dichos actos por su inexistencia de acuerdo con el ar-
"tículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo. Los CC. presi-
"dente de la República, jefe del Departamento del Distrito-
"Federal, tesorero del Distrito Federal, subtesorero de In-
"gresos, director de Rezagos y Ejecución, director, subdirec-
"tor de Catastro y Contribuciones a la Propiedad Raíz subdi-
"rector de Rezagos y Ejecución y subjefe del Departamento -
"de Liquidación y Giro dichas autoridades de la Tesorería -
"del Distrito Federal, manifiesta en su informe con justifi-



cación que rinden conjuntamente, que no existen las autori-
 dades que el quejoso denomina en la presente demanda de am-
 paro como: "jefe del Departamento de Rezagos y Ejecución",
 dentro del organigrama de la Tesorería del Distrito Fede-
 ral, por lo tanto, si no existen dichas autoridades, menos
 aun pueden existir los actos que de ellos se reclaman, por
 lo que procede sobreseer con el mismo fundamento citado. -
 Segundo.- Es cierta la promulgación del presidente de la Re-
 pública de la nueva Ley de Hacienda del Departamento del -
 Distrito Federal, al reconocerlo en su representación el -
 jefe del Departamento del Distrito Federal, quien a su vez
 reconoce, por sí, el refrendo al decreto de promulgación.-
 Son ciertos los actos de refrendo al citado acto de promul-
 gación por parte de los secretarios de Hacienda y Crédito-
 Público y de Gobernación, al reconocerlo en la ausencia de
 dichas autoridades, en ese orden, los secretarios de Ingre-
 sos y de Gobernación. Igualmente es cierto el acto de apro-
 bación y expedición del decreto que reforma la Ley de Ha-
 cienda del Departamento del Distrito Federal, publicado en
 el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de -
 1982, por así manifestarlo en su respectivo informe con -
 justificación. El tesorero del Distrito Federal, niega los
 actos reclamados consistentes en la ejecución; sin embargo,
 si se reclama la aplicación concreta de los artículos -
 que en esta vía constitucional se combaten, y de las bole-
 tas prediales anexas (fojas 36 a 46 de autos), se infiere-
 que ordena su aplicación, aun cuando no los ejecutó perso-
 nalmente, ello implica que son ciertos sus actos. Por últi



CA DE LA UNIÓN
 DE ACUERDO

"mo, los CC. director de Catastro y Contribuciones a la Pro-
"piedad Raíz, subdirector de Catastro y subjefe del Departa-
"mento de Liquidación y Giro dependientes de la Tesorería -
"del Distrito Federal, reconocen en su informe justificado,
"que son ciertos los actos reclamados. Tercero.- Previo el-
"estudio del fondo de este asunto, se deben analizar las -
"causales de improcedencia que en la especie se pueden ac-
"tualizar ya sea que las hagan valer las partes o que de -
"oficio deban invocarse, atento a lo dispuesto en la tesis-
"número 109, visible en la página 197, Octava Parte, última
"compilación de Jurisprudencia, cuyo rubro dice: "IMPROCE--
"DENCIA.- En el informe justificado que conjuntamente rin-
"den las autoridades (foja 143) jefe del Departamento del -
"Distrito Federal, por sí y en representación del presiden-
"te de la República y además los ciudadanos director de Ca-
"tastro y Contribuciones a la Propiedad Raíz, tesorero del -
"Distrito Federal y director de Rezagos y Ejecución, aducen
"la improcedencia del presente juicio de garantías en los -
"términos de las causales de improcedencia previstas en las
"fracciones VI y XV del artículo 73, de la Ley de Amparo, en
"virtud de las consideraciones siguientes: a).- No existen-
"aún actos concretos de aplicación de la ley reclamada. b).-
"El quejoso no agotó previamente a la acción constitucional
"el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Ad-
"ministrativo del Distrito Federal. Son injustificadas las-
"citadas argumentaciones de improcedencia, pues, respecto -
"de la primera debe decirse que sí existen actos de aplica-
"ción de la ley impugnada, dado que la quejosa demuestra -
"con las documentales que exhibió a fojas 47 a 53 de estos-



"autos, haber realizado en cumplimiento del artículo 21 de
"la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal -
"que se combate, declaración del valor catastral correspon-
"diente a las propiedades de esa sociedad mercantil, confor-
"me a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de esa ley; así
"mismo presentó en este expediente las boletas del impuesto
"predial número de cuenta, [REDACTED]

[REDACTED] relativos al sexto bimestre -
"de 1983 (fojas 36 a la 46), por lo que, debe estimarse que
"sí existe aplicación de los artículos reclamados. Por otra
"parte, cuando se reclama una ley por su primer acto de - -
"aplicación es optativo para el quejoso agotar el recurso -
"que proceda y posteriormente acudir al juicio de amparo en
"contra de la resolución que con éste se dicte, o bien ejer-
"citar la acción constitucional desde luego, como en este -
"caso lo realizó la quejosa de acuerdo con el criterio sus-
"tentado por el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de
"la Nación que puede consultarse en las páginas 178 y 179,-
"de la Primera Parte, del último Apéndice al Semanario Judi-
"cial de la Federación, cuyo rubro es: "AMPARO CONTRA LA IN-
"CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. RECURSOS ORDINARIOS". Cuar-
"to.- Es fundado el concepto de violación que hace valer la
"quejosa en el sentido de que los artículos 14, 18, fraccio-
"nes I y III, y parte final, 21 y 22 fracciones I, II, III-
"y IV, y 9o. transitorio párrafo cuarto de la nueva Ley de-
"Hacienda del Departamento del Distrito Federal son incons-



DE LA UNIÓN
DE ACUERDO

"titucionales, porque dejan a la autoridad exactora la de--
"terminación de un elemento esencial del impuesto, como es--
"su base gravable, y respecto al artículo 19 de esa ley, en
"virtud de que es un precepto inequitativo, violando tales--
"preceptos la garantía de justicia tributaria establecida -
"en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
"- El artículo 31, fracción IV, constitucional señala la -
"obligación de todos los ciudadanos mexicanos de contribuir
"al pago del gasto público, de la manera proporcional y --
"equitativa que establezcan las leyes. De acuerdo con dicho
"precepto fundamental no basta que una ley establezca un im
"puesto, sino que es necesario que esa ley señale en forma--
"precisa todos los elementos indispensables del impuesto, -
"que son el sujeto, el objeto, la cuota, la base gravable y
"la forma en que ha de causarse; si la ley deja de estable
"cer alguno de estos elementos, la misma tendrá un vicio de
"inconstitucionalidad. En este caso, el primer párrafo del--
"artículo 14 de la Ley de Hacienda impugnada establece que
"nes serán sujetos del impuesto predial al señalar que es--
"tán obligadas a su pago las personas físicas y las morales,
"que sean propietarias del suelo y de las contribuciones (Sic)
"adheridas permanentemente a ésta. Del mismo párrafo del ar
"tículo 14 señalado se desprende que el objeto del impuesto
"predial es gravar la propiedad raíz de los bienes inmuebles
"que existan en el Distrito Federal. La cuota está señalada
"en el segundo párrafo del propio artículo 14 de la ley ata
"cada de inconstitucional. Respecto de la base gravable el--
"artículo 14 multicitado dice que el impuesto se causará -



aplicando al valor catastral de los inmuebles la tarifa --
"que menciona el artículo 18 de la propia ley, el cual seña
"la que se considerará valor catastral la cantidad que se --
"determine, al realizar la siguiente operación. Se hará la--
"separación del valor del suelo y el de la construcción, se
"reducirá el 3% del valor de la construcción a partir de --
"la fecha en que el contribuyente declaró el valor de la --
"misma o desde aquella en que la autoridad determinó dicho--
"valor; y a la suma del valor del suelo y de la construc--
"ciones, una vez hecha la reducción antes señalada, se le --
"aplicará el factor que determine el Congreso de la Unión;--
"que en el caso está en el artículo 17 transitorio de la --
"propia Ley de Hacienda. El artículo 19 del ordenamiento en
"consulta establece que los contribuyentes que otorguen el--
"uso o goce temporal de un inmueble pagarán el impuesto pre
"dial conforme al valor catastral más alto, que resulte de--
"conformidad con el artículo 18 citado y el que se determi--
"ne multiplicando las contraprestaciones por el uso o goce--
"indicado, por 40.0 y al resultado se le aplicará la tarifa
"el artículo 14 de esa ley. Por su parte, el artículo 21 --
"que se impugna dispone que las sociedades mercantiles, --
"excepto cooperativas, deberán informar mediante declara--
"ción que presentarán dentro de los tres primeros meses del
"año, el valor catastral de sus predios calculados de con--
"formidad con esta ley; además, el artículo 22 de esa ley da
"facultades a las autoridades fiscales para verificar el va
"lor declarado por el contribuyente y determinar un nuevo --
"valor, cuando exista una diferencia mayor de 10% entre el-

LA DE LA NACION
DE ACUERDO

"valor señalado por las autoridades fiscales y el declarado
"por el contribuyente; también le da facultades a las auto-
"ridades fiscales para incrementar el valor de un inmueble,
"para determinar por zonas del Distrito Federal, el valor -
"mínimo del suelo y determinar el valor de los inmuebles -
"con base en la aplicación de valores unitarios, consideran
"do la ubicación de los mismos y el tipo de construcciones.
"Así mismo el artículo Noveno transitorio, cuarto párrafo,-
"establece: "..... En los demás casos, las autoridades fis-
"cales continuarán enviando en el año de 1983 las boletas -
"que correspondan al pago del impuesto predial determinado-
"en el año de 1982, las que se considerarán como pagos pro-
"vicionales, a cuenta del impuesto que se determine confor-
"me a esta ley. Dicha determinación se hará referenda al 1o.
"de enero de 1983." De lo anterior se observa que la Ley de
"Hacienda del Departamento del Distrito Federal, para el -
"año de 1983, deja por una parte al arbitrio de las autori-
"dades fiscales correspondientes al determinar el valor del
"suelo y el valor de las construcciones; valores que son -
"los que servirán de base para obtener el valor catastral,
"al cual se aplicará la tarifa del artículo 14 para estable-
"cer el impuesto predial que se debe pagar. De esta manera,
"se deja en manos de las autoridades fiscales que habrán de
"aplicar la ley, la determinación de un elemento esencial -
"del impuesto como lo es la base gravable, lo que va en con-
"tra de la garantía de legalidad en materia tributaria con-
"sagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución
"Federal. Si bien, en el caso, la ahora quejosa por tratar-

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
SECRETARÍA DE ACUERDOS

se de una sociedad mercantil tiene la obligación de informar dentro de los tres primeros meses del año el valor catastral de sus predios de conformidad con el artículo 21 de la ley que se reclama; ello no convalida la ilegalidad de la base decretada en el artículo 18 en mención, ya que las deficiencias apuntadas, en cuanto al valor único del suelo y de las construcciones subsisten, puesto que no hay reglas específicas para determinarlas, pues, incluso el valor catastral que determine el particular, puede ser modificado por la autoridad fiscal, con posterioridad (artículo 22, fracción I, de esta ley). Pero además, aun cuando también la quejosa es arrendadora del inmueble por el que se determina el impuesto y por ello se sitúa en la hipoteca del artículo 19 en cita y puede causar el gravamen conforme al sistema que este precepto prevé, tal cuestión también es inconstitucional ya que aun cuando la propia ley reclamada, establece la diferencia entre propietarios que otorguen el uso o goce temporal del inmueble y los que no lo hacen (artículos 18 y 19 citados), es decir, establece una desigualdad entre los causantes, permite que los arrendadores sean tratados igual que los que no lo son, o desigual con los que tienen este carácter, en el caso de que el valor catastral más alto sea el que se fije conforme al artículo 18, lo que contraría el principio de equidad que consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues en este caso, como dice el quejoso, se le desconoce su carácter de arrendador. En efecto, la quejosa demuestra con las documentales que exhibió en autos y que-

"se encuentran agregados a fojas 47 a la 56, que por tratar
"se de una sociedad mercantil, en cumplimiento del artículo
"21 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Fe-
"deral, formuló las declaraciones del valor catastral de -
"sus inmuebles, de conformidad con los artículos 18 y 19 de
"la ley que reclama y con ello también acredita que el mon-
"to base de impuesto, calculado conforme al artículo 18 es-
"mayor del que resultó de acuerdo con lo dispuesto en el di-
"verso precepto 19 de esa ley, por lo que es evidente que -
"se le desconoce su carácter de arrendadora al no causar el
"impuesto conforme a ese carácter, con lo que se le da un -
"trato inequitativo y contrario al artículo 31, fracción IV,
"de la Constitución. Por otra parte, del artículo 9o. tran-
"sitorio reclamado, se desprende que el mencionado precepto
"faculta a las autoridades a cobrar al contribuyente el im-
"puesto predial, con la salvedad que el pago respectivo se-
"considerará "PROVISIONAL" o sea no liberatorio de la obli-
"gación pues dicho cobro es con base a las mismas cantida-
"des consignadas en las boletas de 1982. Circunstancia ésta
"que evidencia una total inseguridad jurídica violando en
"perjuicio de la parte quejosa el artículo 16 constitucio-
"nal que consagra a su favor la garantía de seguridad jurí-
"dica. Al ser inconstitucionales, tales preceptos, del mis-
"mo modo deben conceptuarse los actos de aplicación respec-
"tivos, que en perjuicio de la quejosa pretenden realizar -
"el tesorero del Distrito Federal y el director de Catas-
"tro y Contribuciones a la Propiedad Raíz, todos de la Teso-
"rería del Distrito Federal, resulta entonces que, por los-



"motivos indicados deben concederse a la parte quejosa la -
 "protección constitucional que solicita. En atención a lo -
 "anterior es innecesario examinar los demás conceptos de -
 "violación que se proponen con fundamento en la tesis juris-
 "prudencial número 75, visible en la página 129, Octava Par-
 "te del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de-
 "1917 a 1975 cuya voz es: "CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO -
 "SU ESTUDIO ES INNECESARIO."

QUINTO.- Inconformes con la resolución anterior -
 el jefe del Departamento del Distrito Federal en representa-
 ción del presidente de la República y en nombre propio, el-
 tesorero del Distrito Federal, el director de Catastro y -
 Contribuciones a la Propiedad Raíz, hoy denominado director
 de Catastro y Padrones, el subdirector de Catastro y el sub-
 jefe del Departamento de Liquidación y Giro interpusieron -
 recurso de revisión.

Por auto del dieciséis de enero de mil novecien-
 tos ochenta y cinco el presidente de la Suprema Corte de -
 Justicia de la Nación admitió únicamente el recurso de revi-
 sión hecho valer por el jefe del Departamento del Distrito-
 Federal en nombre y representación del presidente de la Re-
 pública y desechó por improcedentes los recursos de revi-
 sión interpuestos por el jefe del Departamento del Distrito
 Federal en su nombre, por el tesorero del Distrito Federal,
 por el director y subdirector de Catastro y Contribuciones-
 a la Propiedad Raíz y por el subjefe del Departamento de Li-
 quidación y Giro. En el mismo proveído el presidente de la-
 Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó el presente --



ESTADO DE LA NACIÓN
 DE ACUERDO

asunto para su estudio al ministro ponente. El proveído mencionado se notificó a las partes por lista que se fijó el - diecinueve de marzo de mil novecientos ochenta y cinco.

El agente del Ministerio Público Federal de la adscripción formuló pedimento en el sentido de que se confirme el fallo recurrido.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO.- Este Tribunal Pleno es competente para- conocer del presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84, fracción I, inciso a), - de la Ley de Amparo y 11, fracción IV bis, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que el mismo se interpone en contra de una sentencia dictada por un juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se plantea la inconstitucionalidad de una ley expedida por el Congreso de la Unión, como lo es la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, en vigor a partir del primero de enero de mil novecientos - ochenta y tres concretamente en cuanto a sus artículos 14,- 18, fracciones II, III, e infine, 18 A, 19, 21 y 22, fracciones I, II, III y IV y los artículos 2o. del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal y 7o., - 8o. y 9o. transitorios del mismo.

La autoridad recurrente expresa como agravios lo siguiente:



"Primer agravio.- Violación a los artículos 77,-
"78 y 192 de la Ley de Amparo. La sentencia recurrida mis-
"ma que nos fue notificada el día 5 de junio de 1984, en -
"su segundo punto resolutivo establece. Segundo.- La Jus-
"ticia de la Unión ampara y protege a la quejosa Inverméxi-
"co, S. A. en contra de los actos reclamados y autoridades
"que se señalan en el segundo considerando y en los térmi-
"nos precisados en el último considerando de esta sentencia.
"La sentencia combatida, definitivamente ~~deja~~ ^{satisface}
"los requisitos de claridad y precisión que la ley impone-
"en cuanto al desarrollo lógico y por el contrario en su -
"tratamiento para determinar la inconstitucionalidad de la
"Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, -
"pretende que por pura y simple deducción que resulta de -
"leer la ley antes mencionada, sin entrar más allá de esto,
"la ley en cita resulta inconstitucional, lo cual a todas-
"luces es incongruente, erróneo e inexacto. El juzgador ex-
"presa en la sentencia que se combate que la tarifa conte-
"nida en el artículo 14 de la Ley de Hacienda del Departamen-
"to del Distrito Federal contraviene el contenido el ar-
"tículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de -
"los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de ser despropor-
"cionada e inequitativa. No se puede decir que sea despro-
"porcionada e inequitativa la tarifa establecida en el ar-
"tículo 14 de la Ley de Hacienda del Departamento del Dis-
"trito Federal, pues por equidad se entiende dar un trato-
"igual a los iguales y en este caso, el impuesto de que se
"trata se aplica de la misma manera a las personas que es-



"tán en igual condición jurídica, así pues nunca se rompe-
"el principio de generalidad de la norma, pues jamás se -
"aplica la misma en forma privativa, y siempre, como ya se
"dijo se da un trato igual a los causantes que se encuen--
"tran en la misma situación jurídica o se colocan en la -
"misma hipótesis normativa establecida por la ley, es de--
"cir, a todos los propietarios o poseedores de predios que
"tienen las mismas características generales en tierra y -
"construcción; por otra parte, el a quo violó en la espe--
"cie el artículo 192 de la Ley de Amparo al no respetar la
"jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la -
"Nación que le es obligatoria, en concreto la jurispuden-
"cia que versa sobre desproporcionalidad y falta de equi--
"dad y que según sostiene nuestro máximo Tribunal deben -
"probarse y en el presente caso los quejosos nunca proba--
"ron esta falta de proporcionalidad y equidad de que ha--
"blan. Segundo agravio.- Violación al artículo 18 de la --
"Ley de Hacienda del Departamento del Distrito General. La
"pretendida falta de proporcionalidad a que el juzgador -
"alude en la sentencia que se recurre resulta falso pues -
"no hay tal, en virtud de que se da la debida intervención
"al causante, y en el caso concreto de acuerdo a lo pres--
"crito por el artículo 18, fracción III, de la ley en cita,
"los contribuyentes del impuesto predial que estimen que -
"el valor catastral es superior al valor real del inmueble
"de su propiedad, podrán ordenar la práctica de un nuevo -
"avalúo por persona autorizada por las autoridades fisca--
"les, lo que nos da como resultado el que además tenga in-



intervención el causante para la fijación del impuesto que-
"debe pagar, estableciendo los recursos de revocación y de
"inconformidad contra los avalúos practicados a las cons-
"trucciones propiedad de los causantes, lo que se traduce-
"en que no se deja al arbitrio de las autoridades fiscales
"determinar el valor del suelo y el valor de las construc-
"ciones a los inmuebles propiedad de los causantes. Tercer
"agravio.- Violación al artículo 31, fracción IV de los Es-
"tados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo. En
"efecto, no se puede decir que sea inequitativa la tarifa-
"establecida en el artículo 14 de la Ley de Hacienda del -
"Departamento del Distrito Federal, pues por equidad se en-
"tiende dar un trato igual a los iguales y en este caso, -
"el impuesto de que se trata se aplica de la misma manera-
"a las personas que están en igual condición jurídica; así
"pues, nunca se rompe el principio de generalidad de la -
"norma, jamás se aplica la misma en forma privativa y siem-
"pre se da un trato igual a los causantes que se encuen- -
"tran en la misma situación jurídica o se colocan en la hi-
"pótesis normativa establecida por la ley, es decir, a to-
"dos los propietarios o poseedores de predios que tienen -
"las mismas características generales en tierra y construc-
"ción; por otra parte, el a quo violó en la especie el ar-
"tículo 192 de la Ley de Amparo al no respetar la jurispru-
"dencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación -
"que es obligatoria, en concreto, la jurisprudencia que -
"versa sobre proporcionalidad y falta de equidad y que se-
"gún sostiene el máximo Tribunal deben probarse, y en el -

DE LA NACION
DE ACUERDO

"presente negocio si la quejosa ni siquiera probó que la -
"ley le fue aplicada y cuanto se incrementó a sus impues--
"tos, menos podía probar la falta de proporcionalidad y -
"equidad de que se habla. Cuarto agravio.- Violación de los
"artículos 76, 78, 80 y 192 de la Ley de Amparo con rela--
"ción con los numerales 222, 349 y 350 del Código Federal-
"de Procedimientos Civiles en relación con el artículo 2o.
"de la Ley de Amparo. La sentencia que se combate en su -
"sexto considerando y que sirve de apoyo al punto segundo-
"resolutivo impugnado, determina que el artículo 14 de la-
"Ley de Hacienda es inconstitucional porque la tarifa que
"el mismo contiene, resulta desproporcionada e inequitati-
"va. Para apoyar su criterio, el juzgador hace una serie -
"de ejemplos entre mínimos y máximos, que aparentemente de
"muestran tal vicio de inconstitucionalidad. Sin embargo -
"lo anterior es totalmente inexacto e infringe los precep-
"tos legales antes invocados, por las razones siguientes:-
"a) El juzgador hace una declaración general ~~de~~ relación-
"al artículo 14 de la Ley de Hacienda, que no corresponde-
"al problema planteado y por ello resulta desorbitante. En
"efecto al quejoso no se le aplican los tres primeros ren-
"glones de dicha tarifa, sino que el cobro del impuesto --
"predial se le hace basándose en el cuarto y último ren- -
"glón de la misma que habla de los predios mayores de-----
"██████████ y a los cuales se les impone el porcentaje -
"del 25%, para todos ellos y, en consecuencia, el monto -
"del impuesto variará, exclusivamente, en razón del valor-
"del predio. En consecuencia, si al quejoso no se le apli-



có esa parte de la tarifa, el juez del Distrito no tenía
"porque analizarla, pues ello no estaba en la litis plan--
"teada y el juzgador solo debió examinar el renglón relati
"vo a los predios con un valor mayor de [REDACTED] y ha--
"cer el estudio del mismo conforme a los conceptos de vio
"lación argumentados. b) El juez de Distrito no contempla
"el acto reclamado tal y como la autoridad responsable lo
"tuvo a la vista. En efecto, las autoridades recurrentes,--
"al aplicar la Ley de Hacienda lo hicieron respecto de un
"inmueble, cuyo valor es superior a la cantidad de -----
[REDACTED] por lo que la tarifa aplicable fue la co --
"rrespondiente a inmuebles de tal valor; en una palabra a--
"la parte quejosa le resultan ajenas las tarifas o renglo
"nes impositivos examinados por el juez de Distrito y aun
"en el supuesto de que estos fueran inconstitucionales, -
"ellos no son materia de la litis ni se le aplicaron a la
"amparista. c) Es importante resaltar que la quejosa en --
"ningún momento se manifestó disconforme con el monto asig
"nado a su propiedad y aunque así lo fuese, el valor del -
"inmueble de referencia fue establecido por disposición di
"versa al artículo 14 de la Ley de Hacienda, toda vez que
"este alude exclusivamente a la tasa del impuesto, por lo
"que lo anterior es extraño al caso a debate. En este or--
"den de ideas el juzgador no tenía porqué analizar la tota
"lidad de la tarifa en cuestión, si consideramos que los -
"renglones de la misma no están concatenados; no tienen -
"relación o bien, influyen sobre la que se le impuso a la
"parte quejosa, a la cual únicamente se le aplicó la refe-

"rente a predios con valor superior a [REDACTED] los - -
"cuales causan un porcentaje de 25% como tasa y para ese -
"renglón el criterio del juzgador es totalmente desacerta-
"do, porque ya no hay los mínimos y máximos a que él hace-
"referencia, ni tampoco las diferencias supuestamente aten-
"tatorias que erróneamente tacha de inconstitucionales; en
"el renglón de los inmuebles de [REDACTED] la tarifa es -
"constante y ascendente, exclusivamente, con vista en el -
"valor del inmueble gravado, sin que haya modificación en-
"la tasa y, por lo tanto, no cabe contemplar los ejemplos-
"aducidos en la sentencia, ni tampoco resultan las despro-
"porciones a que alude el fallo cuestionado. De lo ante- -
"rior resulta que el juzgador no sólo desatendió la litis-
"constitucional, sino que cumplió deficiencias de la queja,
"no obstante ser un amparo de estricto derecho, al examinar
"aspectos no planteados en la demanda, como es la totali-
"dad de la tarifa contenida por el invocado numeral 14 de-
"la Ley de Hacienda, cuando que la controversia se limita-
"a la aplicación de tal tarifa en lo relativo a bienes con
"un valor mayor de [REDACTED] los cuales causan una tasa
"de 0.25% y en ese aspecto, la parte quejosa no expresó -
"concretamente argumento alguno ni tampoco demostró con -
"probanza cierta e indisputable, que para ella la distin-
"ción de predios superiores en valor, a tal cantidad y la-
"correspondiente tasa fuese desproporcionada e inequitati-
"va. Como hecho notorio, además, el juzgador debió conside-
"rar que prácticamente los tres primeros renglones resul-
"tan fuera de la realidad y que muy escasos serán los in--



"muebles con un valor inferior a la citada suma de -----

██████████ por lo que, en este aspecto, la tasa del --

"0.25% no contempla los pretendidos vicios aducidos en la-

"sentencia, pues en este caso el impuesto será, únicamente,

"creciente o decreciente siempre en estricta relación con-

"el mayor o menor valor catastral del valor afectado. d) -

"Por último, como ya reiteradamente se dijo en los agravios

"anteriores, el juzgador invoca los conceptos de falta de -

"proporcionalidad y equidad en contra de la tarifa del ar-

"tículo 14, desatendiendo lo que al respecto ha sustentado

"la Suprema Corte en las tesis que la misma sentencia invo

"ca para desestimar otros conceptos de violación, en el -

"sentido de que no bastan declaraciones inciertas o subje-

"tivas y de carácter impersonal en este punto, sino que de

"ben haber elementos de convicción indubitables y relacio-

"nados con la parte quejosa que acrediten, que, para ella,

"el impuesto es desproporcionado e inequitativo; en una pa

"labra, lo anterior no puede sentarse en expresiones gene-

"rales y abstractas, sino solo para casos particulares y -

"concretos. Los razonamientos anteriores justifican que la

"sentencia ha infringido los conceptos invocados al inicio

"de este agravio y por ello debe ser revocada, negando al-

"quejoso el amparo y protección de la justicia federal. --

"Quinto agravio.- Violación a los artículos 73, fracción V,

"192 y 193 de la Ley de Amparo. En efecto, el juez del co-

"nocimiento no agotó el estudio de todas las causales de -

"improcedencia hechas valer por estas responsables en el -

"informe justificado que al efecto se rindió conjuntamente,

"en especial la contenida en la fracción V del artículo -
"73, ya que, la parte quejosa no demostró fehacientemente-
"con una escritura pública ser la legal propietaria del --
"predio que se pretende gravar, por lo tanto, carece total-
"mente de interés jurídico; de lo anterior se concluye que
"además, el juez del conocimiento viola los numerales 192-
"y 193 de la Ley de Amparo al no respetar la jurispruden--
"cia que lo es obligatoria, en especial la que versa sobre
"interés jurídico en el amparo y que textualmente estable-
"ce: "...INTERES JURIDICO.- Interés jurídico en el amparo,
"falta de. Los quejosos que se consideren afectados por la
"ley que se impugna de inconstitucional, para comprobar su
"interés jurídico en el juicio de amparo, combatiéndola -
"por estimarla inconstitucional, deben demostrar que están
"bajo los supuestos de la ley. La comprobación se puede ha-
"cer por cualesquiera de los medios de prueba previstos en
"las leyes; y si en el caso, no existe ninguna que demues-
"tre que los quejosos estén bajo los supuestos de la ley,-
"sobreseerse el juicio de amparo..." Ejecutoria: Informe -
"1976, 1a. Parte, Pleno, P-496-A en R.5034/72, Jorge Luna-
"Cruz y María Primitiva Toro Rodríguez, 16 de marzo de - -
"1976, U. de 17 V. Por lo que, es de concluirse que la sen-
"tencia que se recurre causa agravios a estas responsables,
"agravios que deben ser reparados negando a la quejosa la-
"protección constitucional indebidamente otorgado por el -
"a quo."



FORMA A
127

A. R. 8712/84.

- 37 -

TERCERO.- Ante todo debe precisarse que no es materia de la revisión el punto primero resolutivo de la sentencia recurrida en el que se sobreseyó en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados del jefe del Departamento del Distrito Federal, director, subdirector de rezagos y Ejecución y subtesorero de Ingresos de la Tesorería del Distrito Federal y del jefe del Departamento de Rezagos y Ejecución. Tampoco es materia de la revisión, la omisión en que incurrió el juez de Distrito al no referirse en su sentencia a los artículos 7o. y 8o. transitorios de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, que también se reclamaron, lo que puede advertirse del estudio relacionado de los actos reclamados que se transcriben en el resultando primero de este fallo y de la parte considerativa de la sentencia recurrida, reproducida en el resultando cuarto. No son materia de la revisión las cuestiones señaladas en virtud de que no fueron impugnadas por la parte a quien pudieron afectar.

Asimismo debe tenerse firme, por no existir agravio en su contra, lo resuelto por el juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa, en el Distrito Federal, en el cuarto considerando del fallo recurrido, en cuanto estimó que el artículo 9o. transitorio de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, vigente a partir del primero de enero de mil novecientos ochenta y tres es inconstitucional porque viola el artículo 16 constitucional que consagra en favor de la quejosa la garantía de seguridad jurídica.

CUARTO.- En principio se examinará el quinto agravio hecho valer por la autoridad recurrente en el que se plantean cuestiones de improcedencia, las que por ser de orden público deben examinarse preferentemente atento a lo dispuesto por la tesis jurisprudencial 109, publicada a fojas 196, de la Octava parte del último apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que lleva por rubro: "IMPROCEDENCIA".

En el quinto agravio se argumenta que el juez del conocimiento no examinó todas las causales de improce

dencia hechas valer por las autoridades responsables en sus informes justificados y en especial la fundada en la fracción V, del artículo 73 de la Ley de Amparo pues señala la quejosa no demostró ser la propietaria del predio que se pretende gravar.

Este agravio es fundado. En efecto, del examen de los informes rendidos por las autoridades responsables (que obran a fojas 104 a 143 del cuaderno de amparo) consta que éstos hicieron valer las siguientes causales de improcedencia:

1a. que el juicio de garantías es improcedente de conformidad con la fracción XV, del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa no agotó el juicio o medio de defensa legal que tenía para modificar, revocar o nulificar cualquier acto de aplicación de la ley reclamada. Esta causal de improcedencia sí fue resuelta por el juez del conocimiento sin que en el escrito de revisión se exprese alguna consideración al respecto.

2a. que el juicio de amparo es improcedente porque la quejosa no demuestra fehacientemente su interés jurídico, toda vez que no demostró ser la propietaria del predio materia del juicio, mediante la exhibición de la escritura pública respectiva. Esta causal no fue examinada por el juez a quo.

3a. Que debe sobreseerse en el juicio de conformidad con lo dispuesto por la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo en virtud de que la interposición de la demanda es extemporánea ya que se presentó después



de los treinta días a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Amparo, y la quejosa no señala en qué momento ocurrió el primer acto de aplicación. Esta causal de improcedencia tampoco fue examinada por el juzgador.

4a. que la quejosa no esgrime conceptos de violación en los que se mencionen violaciones a la Constitución Federal, lo que motiva que el juicio sea improcedente (fracción XVIII, del artículo 73 y 116, fracción IV, de la Ley de Amparo). Esta causal no fue examinada.

5a.- Que procede sobreseer conforme a las fracciones V y VI, del artículo 73 de la Ley de Amparo porque el quejoso no señala en sus conceptos de violación cuál es el interés jurídico que lo impulsa a combatir la Ley de Hacienda ya que los conceptos de violación no contienen consideraciones particulares a propias del quejoso que hagan resaltar la afectación de sus intereses. Esta causal tampoco fue examinada.

Por su parte el juez del conocimiento al examinar las causales de improcedencia aducidos por las autoridades responsables, (considerando tercero de la resolución recurrida) estimó injustificadas las consistentes en el hecho de que no existen actos de aplicación de la ley impugnada, que estimó que la quejosa sí lo demostró con las documentales exhibidos. Asimismo estimó improcedente la causal de improcedencia fundada en el hecho de que la quejosa no había agotado previamente a la acción constitucional el juicio de nulidad, estimando al respecto que cuando se reclama una ley con motivo de su primer acto de aplica

ción es optativo para el quejoso agotar el recurso que proceda y posteriormente acudir al juicio de amparo.

Cabe señalar que estas consideraciones del juez del conocimiento, por no haber sido impugnadas por la recurrente, deben quedar firmes.

Ahora bien, como el juez del conocimiento dejó de examinar y resolver respecto de las demás causales de improcedencia planteadas, este Tribunal pasa a examinarlas con plena jurisdicción.

La segunda causal hecha valer por las autoridades responsables consistente en que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción VI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que la quejosa demuestra fehacientemente ser la legal propietaria del predio materia del juicio, por lo que carece de interés jurídico, es infundada pues para los efectos del presente amparo, es inexacto que la promovente deba acreditar ser la propietaria con la exhibición de la escritura pública de compra-venta que acredite su propiedad del bien objeto de la recatastración a fin de que pueda estimarse que tiene interés jurídico en el amparo, pues dicho interés jurídico sí se acreditó con la exhibición por la quejosa de los documentos consistentes en las boletas del impuesto predial, girados por la Tesorería del Distrito Federal, dirigidos a Promotora Nilo, correspondientes del primero al sexto bimestre de mil novecientos ochenta y tres, como propietaria de los departamentos en condominio marcados con los números [REDACTED]



FORMA A-55
129

A. R. 8712/84.

- 41 -

■ todos ubicados en el edificio número ■ de la calle-
de ■ en la Colonia ■

■ así como con la copia fotostática-
del contrato privado de promesa de compra-venta celebrado-
por Promotora Nilo, S. A., como promitente vendedora e In-
vermexico, S. A., como promitente comprador respecto de -
los departamentos en condominios antes mencionados, contra
to privado de promesa de compra-venta que por contener un-
acuerdo en cuanto a la cosa y el precio, así como respecto
de que la vendedora entrega la posesión de la cosa y la -
compradora paga parte del precio, debe estimarse que es de
compra-venta; de conformidad con la tesis que a continua-
ción se reproduce:

"COMPRVENTA BAJO ASPECTO DE PROMESA DE VENTA.---

"Las llamadas promesas de venta, en que no se contiene ex-
clusivamente una obligación de hacer sino una de dar, o -
"se entrega la cosa y se paga el precio en su totalidad o
"en parte, satisfacen los elementos necesarios para la - -
"existencia de la compraventa, independientemente de la -
"terminología defectuosa que hubieren empleado las partes.
"Quinta Época: Tomo XLIII, Pág. 3462.- Cía. de Terrenos Me-
"xicanos, S. A. Tomo LI, Pág. 79.- Kondo Isuke. Tomo LIII,
"Pág. 473.- Cía de Terrenos Mexicanos, S. A. Tomo LXX, Pág.
"2628.- Hernández Rodolfo. Tomo LXXVII, Pág. 342.- Alfonso
"Angel."

Tesis jurisprudencial que aparece publicada a fo-
jas 332 a 333 del último Apéndice al Semanario Judicial de
la Federación, Cuarta Parte, Tercera Sala.

Los documentos citados administrados con la copia al carbón de la declaración del valor catastral hecha por la Sociedad Mercantil Invermexico, S. A., a la Tesorería del Distrito Federal, la que contiene sellos de recibo de dos y veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y tres, por parte de la Dirección de Catastro y Contribuciones a la Propiedad Raíz de la Tesorería del Distrito Federal, acreditan que la promovente sí tiene interés jurídico para promover el juicio de garantías, ya que la ley reclamada sí afecta su interés jurídico, no obstante no haya exhibido la escritura pública de compra-venta de dichos departamentos que la acrediten como propietario de los mismos.

En cuanto a la tercera causal de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables con fundamento en la fracción XII, del artículo 73, no se surte en el caso pues no puede estimarse que la demanda de amparo se haya presentado extemporáneamente porque se presentó después de los treinta días contados desde que la Ley de Hacienda reclamada entró en vigor, toda vez que la quejosa no combatió dicha ley como autoaplicativa, sino con base en un acto de aplicación.

Sin embargo, este Tribunal advierte la existencia de una diversa causal de improcedencia que de oficio se examina, de conformidad con la tesis jurisprudencial citada con anterioridad.

En efecto, la quejosa reclamó la inconstitucionalidad de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito



Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, concretamente en cuanto a sus artículos 14, 18, fracciones II, III e in fine, 18 A, 19, 21, 22, fracciones I, II, III y IV así como los artículos 20. del Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley de Hacienda y los artículos 70., 80., 90. transitorio del mismo.

Ahora bien, la quejosa señaló en su demanda, concretamente en el capítulo de antecedentes que conforme al artículo 21 de la Ley de Hacienda reclamada las sociedades mercantiles, excepto las cooperativas, están obligadas a informar, mediante declaración, el valor catastral de sus predios, y el cálculo del valor de los inmuebles debía realizarse conforme al procedimiento establecido en el artículo 18 de la ley relativa.

Asimismo la propia quejosa reconoce que el valor catastral de los inmuebles de su propiedad fue declarado el veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y tres, ad-cautelam, ya que consideraba no constitucional la aplicación de la ley.

Tomando en consideración que la quejosa con fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y tres, declaró el valor de los inmuebles de su propiedad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 18 y 21 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal impugnada, y habiendo presentado su demanda de amparo ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en

Materia Administrativa en el Distrito Federal, el diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, la misma resulta extemporánea, ya que se presentó después del término de los quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo; consecuentemente, conforme a lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 y 74, fracción III de la Ley de Amparo procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y publicación de los artículos 18 y 21 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, reclamados.

Por lo que respecta a los demás actos reclamados de las autoridades responsables, la quejosa señala que el primer acto de aplicación tuvo lugar el veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, fecha en la cual pagó el impuesto predial, conforme a la nueva base catastral y que aparece en las boletas correspondientes al sexto bimestre de mil novecientos ochenta y tres sin que exista demostrada la fecha en la que se notificaron esas boletas. Ahora bien, como ya se ha señalado la quejosa presentó su demanda de amparo el diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, es decir dentro del término de los quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo y por tanto, por lo que respecta a los demás actos reclamados de las autoridades responsables, distintos de los artículos 18 y 21 de la Ley de Hacienda del Distrito Federal, la demanda fue interpuesta en tiempo oportuno.



131

A. R. 8712/84.

- 45 -

tuno.

En cuanto a la cuarta causal de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables, que fundan en el hecho de que de la quejosa no esgrime concepto de violación en el que se señale se infrinja la Constitución Federal es inoperante, pues no puede estimarse que exista dicha causal porque, según aducen las autoridades responsables, no se reclamen violaciones directas a la Constitución, -- pues el interés jurídico de la promovente no depende de la correcta o incorrecta formulación de los conceptos de violación.

Por último, tampoco se puede estimar que operan las causales de improcedencia que prevén las fracciones V y VI, del artículo 33 de la Ley de Amparo porque en los conceptos de violación el quejoso no exprese el interés jurídico que lo impulsa a combatir de Ley de Hacienda, pues el interés jurídico de la promovente no depende de la correcta o incorrecta formulación de los conceptos de violación.

Determinado lo anterior, respecto de las diversas cuestiones de improcedencia hechas valer por la autoridad y la que de oficio examinó este Pleno procede estudiar los agravios aducidos en relación con el otorgamiento del amparo solicitado.

QUINTO.- Los agravios 1o., 3o. y 4o. hechos valer son inoperantes.

En efecto el juez del conocimiento concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la quejosa porque estimó que los artículos 14, 18, fracciones I y III y parte final, 21 y 22, fracciones I, II, III y IV y 9o. - transitorio, párrafo cuarto de la Ley de Hacienda del Distrito federal, eran inconstitucionales porque dejaban a la autoridad exactora la determinación de un elemento esencial del impuesto, como lo es su base gravable y el artículo 19 de la ley es inequitativo y viola lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV de la Constitución General de la República. Que los preceptos de la Ley de Hacienda mencionadas dejan al arbitrio de las autoridades fiscales correspondientes el determinar el valor del suelo y el valor de las construcciones, valores que sirven de base para obtener el valor catastral, al cual se aplicará la tarifa del artículo 14 para establecer el impuesto predial, dejando en esta forma en manos de la autoridad exactora la determinación de un elemento esencial del impuesto, como lo es la base gravable, lo que va en contra de la garantía de legalidad. Que no obstante que la quejosa, conforme al artículo 21 de la ley reclamada tiene que informar dentro de los tres primeros meses del año, el valor catastral de sus predios, ello no convalida la ilegalidad de la base decretada en el artículo 18, ya que en cuanto al valor único del suelo y construcciones subsisten, pues no hay reglas para determinarlos, pues, incluso, el valor catastral determinado por el particular puede ser modificado por la autoridad fiscal, con posterioridad. Que los artículos 18 y 19 esta-



blecen una desigualdad entre los causantes ya que permite que los arrendadores sean tratados igual que los que no lo son, o desigual con los que tienen ese carácter. Que el artículo 9o. transitorio reclamado que faculta a las autoridades a cobrar al contribuyente el impuesto predial, con la salvedad de que el pago respectivo es provisional, o sea no liberatorio de la obligación, evidencia una total inseguridad jurídica violando en perjuicio de la quejosa el artículo 16 constitucional.

Por su parte la autoridad recurrente en los agravios mencionados señala, en síntesis, que la sentencia recurrida contraviene lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque contrariamente a lo señalado por el juez, la tarifa fijada por el artículo 14 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, no es desproporcionada ni inequitativa; que el juez a quo violó el artículo 192 de la Ley de Amparo, al no respetar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que le es obligatoria y, concretamente la jurisprudencia que dispone que la desproporcionalidad y la falta de equidad deben probarse. Que la tarifa contenida en el artículo 14 de la Ley de Hacienda no es inequitativa ya que da un trato igual a todos los iguales y nunca rompe el principio de generalidad. Que los argumentos en los que se fundó el juzgador para estimar que la tarifa contenida en el artículo 14 de la Ley de Hacienda son inexactos y violan lo dispuesto por los artí-

culos 76, 78, 80 y 192 de la Ley de Amparo; que el juzgador hace una declaración general, ya que al quejoso no se le aplicó la parte de la tarifa examinada por el juez; que el juez no examinó el acto reclamado tal y como la autoridad lo tuvo a la vista y que además la quejosa no se manifestó disconforme con el monto asignado a su propiedad y - que éste fue establecido por disposición diversa al artículo 14 de la Ley de Hacienda, por lo que dicha cuestión resulta ajena al debate.

Estos argumentos expresados por la recurrente - son inoperantes, debido a que no contiene razonamientos - tendientes a demostrar la supuesta ilegalidad de la sentencia recurrida, pues no combaten, en forma alguna, los fundamentos legales ni las consideraciones en que se sustenta el fallo recurrido.

En efecto, comparando las consideraciones expuestas por el juez de Distrito y los agravios formulados, se advierte que éstos son inoperantes por no estar en relación directa e inmediata con aquéllas, pues en la sentencia recurrida no se examinó la tarifa contenida en el artículo - 14 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, a que alude la recurrente en sus agravios.

Es aplicable en la especie, el criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia - de la Nación, que este Tribunal Pleno hace suyo, en la jurisprudencia publicada con el número 321, en la página -- 538, de la tercera parte del último apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice:



"AGRAVIOS INSUFICIENTES.- Cuando en los agravios "aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios."

"Séptima Epoca, Tercera Parte: Vol. 1, Pág. 131.
"A.R. 7798/67.- Comisariado Ejidal del Poblado "El Chauz", Mpio. de Huacana, Mich.- Unanimidad de 4 votos. Vol. 4, --
"Pág. 141.- A.R. 1259/68.- Raúl Chavira Flores.- 5 votos.--
"Vol. 4, Pág. 141.- A. R. 8742/67.- Laureano Treviño Treviño, 5 votos. Vol. 6 Pág. 79.- A.R. 6472/68.- Esther Ceballos Vda. de Buenrostro y Coase.- 5 votos. Vol. 7, Pág. -
"56.- A.R. 7532/68.- Comisariado Ejidal del Poblado de San Miguel Eménguar, Mpio. de Salvatierra, Gto. 5 votos."

También sirve de apoyo a la presente sentencia, la tesis sustentada por este Tribunal Pleno que aparece publicada con el número 13, en la página 277, de la primera parte del informe rendido a la Suprema Corte por su presidente al término del año de 1977, que a la letra dice:

"AGRAVIOS, EXPRESION DE.- Si en los agravios que hace valer el recurrente, ninguna objeción formula contra el considerando que rige el punto resolutivo del fallo en revisión aun cuando cite ese considerando y señale el artículo del ordenamiento legal reclamado, al que se refiere el mismo, si no precisa ni expone argumento que esté -

"en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos con esa parte de la sentencia, así como, si no hace la concordancia necesaria entre éstos y los dispositivos legales que estima infringidos, es indiscutible que los razonamientos en que se apoya el juez de Distrito para resolver en el sentido en que lo hizo, siguen en pie, y por lo mismo, continúan rigiendo el punto decisorio respectivo; máxime si se toma en cuenta, por una parte, que los amparos de naturaleza civil, son de estricto derecho y no puede suplirse la deficiencia de la queja y, por la otra, que a este Máximo Organismo Judicial de la Nación le está vedado examinar de oficio la legitimidad de las resoluciones de los jueces de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, que terminantemente ordena: "El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas: I.- Examinarán únicamente los agravios alegados contra la resolución recurrida;...". Consecuentemente, ante la ausencia de agravios, procede confirmar en este aspecto del fallo recurrido."

"Amparo en revisión 1964/76.- Horacio Moreno Cballero, fallado el 28 de junio de 1977.- Unanimidad de 16 votos de los señores Ministros: López Aparicio, Cuevas, Castellanos Tena, Rivera Silva, Langle Martínez, Abitia - Arzapalo, Lozano Ramírez, Rebolledo, Palacios Vargas, Serano Robles, Canedo Aldrete, Salmorán de Tamayo, Sánchez



A. R. 8712/84.

- 51 -

"Vargas, Calleja García y Presidente Téllez Cruces, res-
"pecto de los puntos resolutivos y en la parte considerati-
"va modificada, por mayoría de catorce votos de los señ-
"res Ministros: Franco Rodríguez, Cuevas, Castellanos Tena,
"Rivera Silva, Langle Martínez, Abitia Arzapalo, Lozano Ra-
"mírez, Rebolledo, Serrano Robles, Canedo Aldrete, Salmo-
"rán de Tamayo, Sánchez Vargas, Calleja García y Presiden-
"te Téllez Cruces. El C. Ministro Palacios Vargas manifes-
"tó que formulará voto particular. Ponente: Arturo Serrano
"Robles. Secretario: Efraín Polo Beñal."

SEXTO.- El segundo agravio es también inoperante.

En efecto, la autoridad recurrente señala en sín-
tesis como argumento que el juez del conocimiento violó el
artículo 18 de la Ley de Hacienda del Departamento del Dis-
trito Federal, porque la falta de proporcionalidad a la -
que el juez alude en la sentencia no existe en virtud de -
que el causante que estime que el valor catastral es supe-
rior al valor real del inmueble de su propiedad podrá con-
forme al artículo 18, fracción III, de la Ley de Hacienda-
ordenar la práctica de un nuevo avalúo por persona autoriza-
da por las autoridades fiscales, lo que da como resultado-
que se da intervención al causante en la fijación del -
impuesto que debe pagar, lo que se traduce en que no se-
deja al arbitrio de la autoridad fiscal determinar el va-
lor del suelo y de las construcciones.

Este agravio resulta inoperante en virtud de que
como se estimó en el considerando cuarto de esta resolu-
ción, el juicio de amparo es improcedente respecto de los
actos reclamados del Congreso de la Unión y otras autorida-

des consistentes en la aprobación, expedición promulgación, refrendo y publicación de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal que entró en vigor a partir del primero de enero de mil novecientos ochenta y tres, concretamente en cuanto a sus artículos 18 y 21; consecuentemente como en el agravio mencionado se alega la constitucionalidad del artículo 18 de la citada Ley de Hacienda, el mismo resulta inoperante para los efectos de la presente revisión.

Como resultado del estudio de los agravios, en la materia de la revisión debe modificarse la sentencia que se revisa para establecer que se sobresee en el presente juicio de amparo en contra de los actos reclamados por la quejosa del Congreso de la Unión y otras autoridades consistentes en la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, en cuanto a sus artículos 18 y 21 - y confirmarse la sentencia en cuanto a la concesión del amparo en contra de los actos reclamados de las citadas autoridades consistentes en la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de la citada Ley de Hacienda en cuanto a sus artículos 14, 22 y 9o. transitorio debiendo abarcar al acto de aplicación cuya inconstitucionalidad se deriva de la inconstitucionalidad de la ley reclamada.

Por lo expuesto y con fundamento en los artícu--



135

A. R. 8712/84.

- 53 -

los 103, fracción I, 107, fracción VIII, inciso a) de la -
Constitución general de la República, 90, 91 y relativos -
de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.- Queda firme el punto primero resolutive
vo de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- En la materia de la revisión, se modifi-
fica la sentencia recurrida.

TERCERO.- Se sobresee en el presente juicio de -
garantías respecto de los actos reclamados del Congreso de
la Unión, del presidente de la República, de los secreta-
rios de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, del
tesorero del Distrito Federal, y del director de Catastro
y Contribuciones a la Propiedad Raíz, del subtesorero de
Ingresos, del subdirector de Catastro y Contribuciones a -
la Propiedad Raíz y del subjefe del Departamento de Liqui-
dación y Giro, estos cuatro funcionarios de la Tesorería -
del Distrito Federal; consistentes en la aprobación, expedición, promulgación, publicación y aplicación de la Ley -
de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno
de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, en cuanto -
a sus artículos 18 y 21.

CUARTO.- La Justicia de la Unión ampara y protege
a la Compañía Invermexico, S. A., contra los actos que
reclama de las autoridades que quedaron precisadas en el -
primer resultando de esta ejecutoria consistentes en la --
aprobación, expedición, promulgación, aplicación de la - -
Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación en cuanto a-

- 54 -

sus artículos 14, 22 y 9o. transitorio.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el tocá.

MCSH/mcc

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno, por unanimidad de dieciséis votos de los señores Ministros López Aparicio, López Contreras, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Gutiérrez, Castañón León, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Moreno Flores, Schmill Ordóñez y Presidente Iñárritu. Fue ponente el señor Ministro Mariano Azuela Gutiérrez. El proyecto se aprobó con modificaciones propuestas por el señor Presidente y aceptadas por el ponente. Ministros ausentes: de Nava, Salmorán de Tamayo, del Río Rodríguez y Olivera Toro. El señor Ministro Leopoldino Ortiz Santos estuvo ausente por pedido para conocer del asunto, impedimento que fue calificado de legal por el Tribunal Pleno. Firman los CC. Presidente y Ministro ponente con el C. Secretario General de Acuerdos que da fe.

EL PRESIDENTE

JORGE INARRITU

EL PONENTE

MARIANO AZUELA GUTIERREZ

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

JAVIER DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

10 DIC. 1985

En y Por medio de lista, se notificó la resolución anterior a las partes y al Ministerio Público Federal. Conste.